



Proceso	Verbal
Demandante	Isabel Cristina Arango Arcila
Demandado	La Equidad Seguros Generales O.C. y O.
Radicado	05001-31-03-021-2022-0371-01
Instancia	Segunda
Procedencia	Juzgado 21 Civil del Circuito de Medellín
Ponente	Luis Enrique Gil Marín
Asunto	Interlocutorio No. 067
Decisión	Revoca
Tema	Rechazo demanda. Requisitos de la demanda. Interpretación de la demanda. Certificado de existencia y representación de las personas jurídicas. Eventos en los que el certificado no se tiene que aportar con la demanda. Exigencia de remitir la demanda y anexos a la dirección del demandado. A lo imposible nadie está obligado.

## **TRIBUNAL SUPERIOR**

### **SALA SEGUNDA DE DECISION CIVIL**

Medellín (Ant.), cinco de junio de dos mil veintitrés

#### **I. OBJETO**

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del auto proferido el seis (6) de

febrero del presente año, por medio del cual el **JUZGADO VEINTIUNO CIVIL DEL CIRCUITO** rechazó la demanda verbal instaurada por la señora **ISABEL CRISTINA ARANGO ARCILA** en contra de **LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O. C., COOPERATIVA YOLOMBINA DE TRANSPORTE "COOYOLTRANS" y LUCELLY ADRIANA BUSTAMANTE BARRERA.**

## **II. ANTECEDENTES**

El Juzgado por auto del 19 de enero de 2023, inadmitió la demanda y concedió el término de cinco (5) para cumplir con los requisitos exigidos; luego, como consideró que nos los había cumplido, por auto del seis (6) de febrero de este año rechazó la demanda.

La parte demandante oportunamente interpuso el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda, argumentando: El Juzgado emitió auto inadmitiendo la demanda y exigiendo una serie de requisitos, frente a los cuales considera que los cumplió a cabalidad; que la Judicatura indica que el apoderado manifiesta que la señora Omaira del Socorro Duque Álzate es la representante legal de la aseguradora; pero su calidad no está acreditada; que si bien la citada señora aparece citada en el certificado de inscripción de documentos en la Cámara de Comercio, en el acápite de miembros de la junta directa, no se cumple con los

presupuestos de los arts. 84 y 85 del C. G. del Proceso; ahora, en el texto del libelo aduce que la citada señora funge como representante legal de la Sucursal Medellín, o quien haga sus veces, poniendo de presente que la citada señora Duque Álzate no es la demandada; considera relevante el art. 85 citado, porque refuerza su razón.

Así mismo, en cuanto a las pretensiones indica que la parte actora no realizó la adecuación de las mismas, argumentando que los fundamentos facticos que allí se encuentran "*ni quitan ni ponen*"; pero olvida que es precisamente el art. 82 del C. G. del Proceso, que trae como requisitos "*Lo que se pretende, expresado con precisión y claridad*". Al efecto, replica exponiendo que cada una de las pretensiones de la demanda se encuentran elaboradas en debida forma y con soporte en jurisprudencia; advierte que cuando las pretensiones de la demanda no son claras, el juez está en el deber de interpretar la demanda.

Así mismo, que el inc. 1º del art. 3º del Decreto 806 de 2020 e incorporado en la Ley 2213 de 2022, como legislación vigente, consagró el traslado anticipado, para cuyo efecto al momento de presentar la demanda se remite al demandado copia de la demanda y de sus anexos, que no constituye la notificación del auto admisorio de la demanda, lo que es una práctica o un mero formalismo más; porque cuando de notificaciones se trata, es de providencias judiciales, sin que

hasta la fecha se haya emitido; pero, precisa que ese traslado anticipado se efectuó a la señora conductora y propietaria del vehículo causante del daño, en la dirección de la empresa afiliadora y que de buena fe desconocen su domicilio, pero que tienen conocimiento que vive en zona rural del municipio de Yolombo, quien cuenta con un celular que jamás contesta, que parece que estuviera inactivo.

Finalmente, considera que le asisten razones para que se reexamine el proceder del señor Juez, se corrijan los errores y, en consecuencia, se revoque el auto que rechaza la demanda y, en su lugar, se proceda a su admisión, porque se encuentran reunidos en su totalidad los requisitos exigidos; para terminar citando fundamentos de derecho y jurisprudencia.

### **III. CONSIDERACIONES**

Por auto emitido el 19 de enero, el Juzgado inadmitió la demanda; siendo del caso, destacar los requisitos que el Juzgado consideró que no se cumplieron y que a la postre, llevaron al rechazo de la demanda y son el motivo de apelación. Al efecto, exigió: *"1. Informar el nombre del representante legal de La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, de modo que coincidan con la documentación que para acreditar dicha calidad se aportó, por cuanto a quien se informó ostentaba dicha calidad, quien*

*no se encuentra inscrita en el certificado de existencia y representación legal presentado; adicionalmente, se suministrará su número de identificación, domicilio, dirección física y electrónica para recibir notificaciones, conforme lo disponen los numerales 2 y 10 del artículo 82 ibidem.*

*(...)*

*"6. Expresar con total precisión y claridad las pretensiones de la demanda, evitando relatar circunstancias fácticas dentro de las mismas.*

*"7. Acreditar el envío de la demanda y sus anexos a la codemandada Lucelly Adriana Bustamante Barrera según lo consagrado en el art. 6 de la Ley 2213, debido a que se le remitió la documentación al correo electrónico de la sociedad transportadora".*

La parte demandante oportunamente se pronunció; frente al primer requisito informa que el nombre del representante legal de la compañía de seguros es Omaira del Socorro Duque Álzate, como se corrobora en la pág. 21 del certificado de existencia y representación legal de la sociedad, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá; que el domicilio es Carrera 9A. Número 99-07, Torre 3, piso 14, Bogotá. Igualmente, su correo es:

[notificacionesjudicialesequidad@laequidadseguros.coop](mailto:notificacionesjudicialesequidad@laequidadseguros.coop), como se verifica en le pág. 1 del certificado adjunto.

Así mismo, al indicar los correos electrónicos, precisó que las señoras Isabel Cristina Arango Arcila no tiene correo electrónico y Lucelly Adriana Bustamante B., no se le conoce correo electrónico.

Sobre el particular tenemos: las sociedades pueden establecer sucursales y agencias para el desarrollo de su objeto social; al efecto, art. 263 del C. de Comercio, establece: *"Son sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad.*

*"Cuando en los estatutos no se determinen las facultades de los administradores de las sucursales, deberá otorgárseles un poder por escritura pública o documento legamente reconocido, que se inscribirá en el registro mercantil. A falta de dicho poder, se presumirá que tendrán las mismas atribuciones de los administradores de la principal".*

Por su parte, el art. 264 consagra que *"Son agencias de una sociedad sus establecimientos de comercio cuyos administradores carezcan de poder para representarla.*

En este caso, el Juzgado exigió la certificación sobre la representación de la Equidad Seguros Generales O C, porque la señora Omaira del Socorro Duque Álzate, de quien se afirma en la demanda que tiene esa representación, en el certificado que se trajo no aparece como tal.

Al efecto, el art. 85 del C. General del Proceso, establece: ***“Prueba de la existencia, representación legal o calidad en que actúan las partes. La prueba de la existencia y representación de las personas jurídicas de derecho privado solo podrá exigirse cuando dicha información no conste en las bases de datos de las entidades públicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la información esté disponible por este medio, no será necesario certificado alguno”***. A renglón seguido, precisa la norma que, en los demás casos si se deberá aportar la prueba de la existencia y representación legal del demandante y del demandado.

En cumplimiento de la Política de Racionalización de Trámites la Superintendencia de Financiera de Colombia puso a disposición de sus usuarios el servicio en línea para la expedición de certificados de existencia y representación legal de las entidades sujetas a su vigilancia. A continuación publicamos el texto completo de la nota publicada por la Superfinanciera.

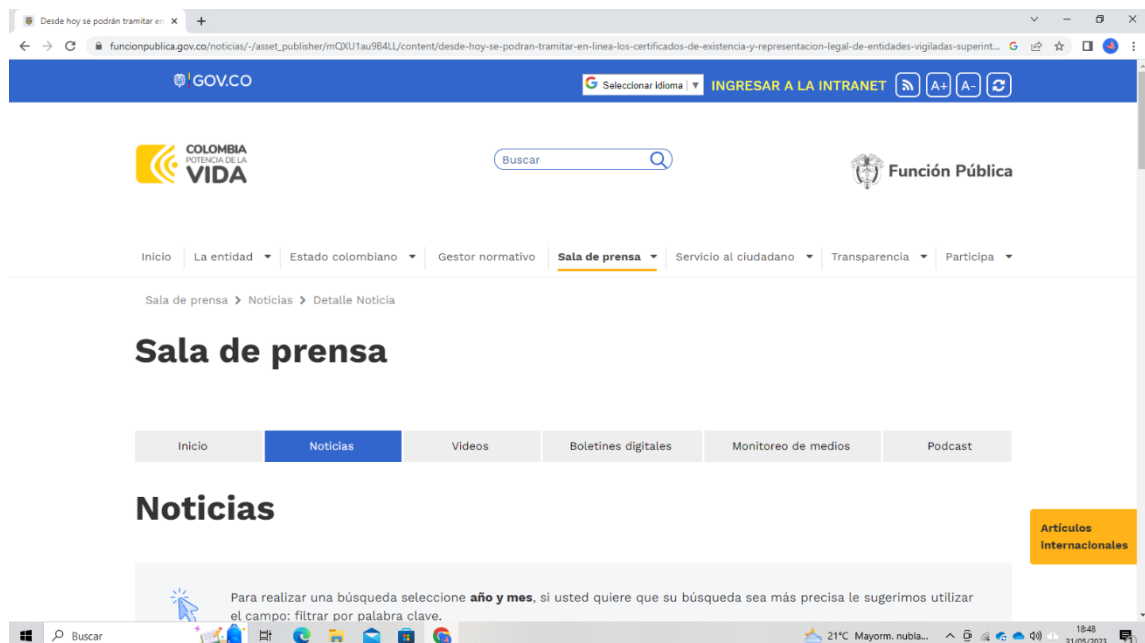
A partir de hoy la Superintendencia Financiera de Colombia pone a disposición de la ciudadanía el servicio en línea para la expedición de certificados de existencia y representación legal de las entidades sujetas a su vigilancia.

Esta nueva herramienta fue desarrollada por la Superfinanciera acorde con las políticas de racionalización de trámites y con la idea de satisfacer las necesidades de los usuarios de manera ágil y oportuna bajo condiciones de fidelidad y seguridad.

Desde la fecha, los certificados de existencia y representación legal ya no tendrán costo y se podrán obtener en documento digital o imprimirlo, según sea la necesidad del usuario, siguiendo estos sencillos pasos: 1) Ingrese al portal web de la Superintendencia Financiera [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co); 2) Debajo del menú principal en la sección "*Servicios al ciudadano*" encontrará el título "*Certificados de existencia y representación legal en línea*"; 3) Diligencie los espacios con la información básica del usuario; 4) Llene los espacios relacionados con la información de la entidad sobre la cual está solicitando el certificado y 5), Dé clic en el botón "Generar certificado".

En caso de que quien consulta quiera validar el certificado expedido, lo podrá hacer a través de la misma herramienta accediendo a través del botón “*Verificar certificado*” con el PIN que se suministra y aparece en la parte superior del documento.

Las consultas se podrá realizar en tiempo real y se pondrá a disposición del usuario la información certificada por la Superintendencia Financiera relacionada, entre otras, con la razón social de las entidades, su término de duración, sus directores y representantes legales y las facultades que los revisten.



Es más, con la demanda se trajo una certificación obtenida de la Superintendencia Financiera, generada con el pin No. 3826816357178062, donde aparece como representante legal el presidente ejecutivo Néstor Raúl Hernández Ospina y a renglón seguido, varios nombres de representantes legales suplentes y pone de presente que con ese mismo pin se puede verificar la información en la página de la Superfinanciera.

Sumado a lo anterior, tenemos, que tal como se puede consultar en la página de la Equidad Seguros Generales O C, la misma cuenta con establecimientos de comercio o agencias en distintas ciudades del país, cuyos administradores carecen de poder para representarla por expreso mandato del art. 264 de la codificación mercantil; lo que implica que la representación recae en el representante legal de la sociedad, en este caso de Equidad Seguros Generales O C.

Como la información requerida está disponible en la superintendencia financiera para quien la requiera, por mandato del art. 85 no se podía exigir su aportación y, de contera, el juzgado no podía inadmitir la demanda exigiendo la mencionada certificación y, mucho menos rechazarla argumentando que el requisito no se cumplió.

En cuanto al requisito sexto, manifiesta que las pretensiones relacionadas en la demanda, si se observan bien, quedaron redactadas en forma correcta; ahora, si el Juzgado considera que existen algunas circunstancias "*fácticas*" dentro de las pretensiones "*ni quitan ni ponen*" para la admisión de la demanda y con soporte en el art. 11 indica que el juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalismos innecesarios.

En efecto, en cuanto a las pretensiones del libelo demandador; más concretamente, en las suplicas sobre el perjuicio moral subjetivo y el daño a la vida de relación para fijar la cuantía o el monto de la condena esperada, en verdad se constata que comienza citando jurisprudencia; incluso, luego de la respectiva petición vuelve a citar jurisprudencia; lo que propiamente no constituyen fundamentos fácticos o hechos fundantes de las pretensiones; en cambio, son fundamentos de derecho, que también constituye una exigencia del art. 82-8 del C. General del Proceso, que señala los requisitos de contenido que toda demanda debe observar y, en verdad, si al redactar la demanda se observa la técnica o derrotero legalmente prevista, esos fundamentos de derecho deben estar contenidos en otro capítulo o ítem del libelo, aparte del de las pretensiones, como igual ocurre con otros datos que se deben suministrar, como precisamente ocurre con los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones invocadas.

Ahora, la lectura de la demanda, más concretamente de los hechos y pretensiones, permite colegir que allí se advierte sin dificultad lo que se pretende; incluso, sin necesidad de un esfuerzo interpretativo, el cual sí se requiere y se tiene que realizar en aquellas demandas que por las vaguedades o lagunas que presentan, dificultan su entendimiento, para desentrañar su genuino sentido, más concretamente, de las suplicas invocadas; en cuya tarea, incluso se tiene en cuenta la posición asumida por los extremos de la relación procesal en las distintas actuaciones, en aras de poner a salvo principios tan caros como el de la tutela judicial efectiva, el de acceso a la justicia y el de un debido proceso. Ahora, si desde los albores el juez advierte esa dificultad tiene el deber de utilizar sus poderes como juez director del proceso, para que desde un principio se corrijan tales irregularidades y, así evitar las dificultades que se presentan para que el demandado asuma sin riesgos la defensa, así como las que se presenta en la interpretación de la demanda al momento de proferir la sentencia; pero, en situaciones como la presente, a pesar de que no se observó adecuadamente la técnica en la formulación de la demanda, lo que desdice de quien la elaboró, no hay lugar a la inadmisión de la demanda y, mucho menos, a su rechazo; pues en verdad, se convierte en un formalismo riguroso y exagerado, que conlleva a unas consecuencias desproporcionadas que no ameritan sacrificio del derecho de acceso a la jurisdicción.

Finalmente, en cuanto a la exigencia de remitir copia de la demanda con sus anexos, al correo electrónico a la demandada Lucelly Adriana Bustamante Barrera, el recurrente manifiesta que en el expediente está acreditado que envió la demanda y anexos a la señora Lucelly Adriana Bustamante Becerra, al correo electrónico de COOYOLTRANS, empresa afiliadora del vehículo causante del daño, termina indicando que se debe tener en cuenta que la citada señora dice vivir en una vereda de Yolombo, por sustracción de materia no se cuenta con su dirección física y para rematar, no se cuenta con dirección electrónica.

Sobre el particular, el art. 6º de la Ley 2213 de 2022, establece: *"La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. No obstante, en caso que el demandante desconozca el canal digital donde deben ser notificados los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo así en la demanda sin que ello implique su inadmisión."*

*"Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda."*

*"Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar a este.*

*"De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas para el archivo del juzgado, ni para el traslado.*

*"En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presenta el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.*

*"En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado".*

Lo anterior pone de manifiesto que si el demandante desconoce el correo electrónico de uno de los demandados, debe remitir la demanda y sus anexos a su dirección física donde puede ser notificado y, en caso de que desconozca estas direcciones, se encuentra en imposibilidad de cumplir con el requisito y como a lo imposible nadie está obligado, la norma lo previó expresamente y además, estableció mecanismos para lograr su vinculación al proceso a través de un curador ad litem, previo emplazamiento; lo que pone de presente, que cuando la demanda informa claramente el desconocimiento de tales datos, la demanda no se puede inadmitir y rechazar; a menos que tenga contradicciones en tal sentido o que al hacer la manifestación no se cumpla formalismos legalmente establecidos.

Lo anterior es suficiente para que se imponga la revocatoria del auto que rechazó la demanda y, para que se devuelva la actuación al Juzgado de primer grado para que continúe con el trámite que legalmente corresponde, con la advertencia que no puede volver sobre los requisitos exigidos y que dieron lugar al rechazo de la demanda.

#### **IV. RESOLUCION**

A mérito de lo expuesto **LA SALA SEGUNDA DE DECISION CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN,**

## **R E S U E L V E**

- 1.** Por lo dicho se revoca el auto de fecha y procedencia indicadas.
- 2.** Sin costas porque no se causaron.
- 3.** Se ordena devolver la actuación al Juzgado con la advertencia indicada.

## **CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Enrique Gil Marín', with a large circular flourish at the beginning and a long horizontal stroke extending to the right.

**LUIS ENRIQUE GIL MARÍN**  
**Magistrado**